

# **“Reflexiones sobre la codificación del derecho de aguas”**

*Miguel Mathus Escorihuela*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Profesor Emérito de la Universidad de Mendoza (2011), Director del Instituto de Agua y Ambiente de la Universidad de Mendoza; Director del Doctorado en Ambiente y Recursos Hídricos y Vicerrector de la Universidad de Mendoza.

Mail de contacto: mathusmiguel@gmail.com

---

## **RESUMEN**

El trabajo aborda la cuestión de la sistematización del derecho de aguas através de códigos de agua en la República Argentina, es decir, considerando el esquema federal de competencias del país. Trata la gestión histórica del derecho provincial de aguas y de la codificación en particular. Define que debe entenderse por un código de aguas y cuáles son las temáticas que debe contener, a la vez que se ocupa de enunciar otros temas que algunos códigos incorporan, analizando la conveniencia de su incorporación.

El trabajo remarca la importancia de la realidad geográfica, hidrográfica y ambiental del ecosistema donde se aplicarán sus disposiciones, haciendo hincapié en la necesidad de que cada código resuelva los problemas concretos de sus provincias. En igual sentido, apuntala la necesidad de que los códigos ofrezcan soluciones a los problemas que puede causar el agua y los que ésta pueda sufrir. También el trabajo discute la forma en que la Nación interpreta y avanza sobre el sistema de competencias trazado por la Constitución Nacional y finaliza con consideraciones sobre la experiencia del caso de Mendoza que a pesar de ser pionera en la materia aún no cuenta con un código de aguas, tratando la jurisdicción a partir de la creación constitucional del Departamento General de Irrigación.

**Palabras claves:** aguas, códigos, contenidos, principios

---

## **ABSTRACT**

The present paper addresses the issue of systematization of waters regulations in provincial water codes in Argentina, owing its federal government scheme. It article briefs the historic management of water at a provincial level and its codification. It defines what a water code is and the content they shall regulate. At the same time, this paper addresses other issues incorporated by provinces, and it analyses the appropriateness of such inclusions. This essay highlights the importance of geographic, hydrographic and environmental particularities of the ecosystem in which water codes are applied, emphasizing the necessity of offering solutions for concrete local problems. Likewise, the article refers to the need of putting up tools for those peculiar issues of water management. Additionally, the paper discusses how the Nation interprets and advances over the competences system outlined by the Constitution, ending with some considerations about the case “Mendoza,” which owing the lack of a national

water code, it deals with such jurisdiction basing on the constitutional creation of the General Department of Irrigation.

**Keywords: keywords: waters, codes, contents, principles**

---

## **1. Tema**

La codificación del Derecho de Aguas en nuestro país es un proceso que se inició durante del siglo anterior. Cuando el Derecho de Aguas comenzó a ganar autonomía en el ámbito del Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y, más tarde, en relación al Derecho Ambiental, se consolidó la tendencia a su codificación. En la segunda mitad del siglo pasado hubo proyectos importantes en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza pero, en 1946, Salta, aprueba el primer Código Argentino de Aguas moderno, modelo en su género por su contenido y la técnica legislativa empleada.

Un Código de Aguas es un conjunto sistemático y ordenado de disposiciones normativas referidas al dominio y uso de las aguas, a la defensa contra sus efectos nocivos o dañosos, a las limitaciones al dominio necesarias para su aprovechamiento o para prevenir sus efectos dañinos, a las obras hidráulicas necesarias para el uso o defensa, a la participación de los usuarios en el gobierno y administración del recurso y a un régimen sancionatorio que garantice el cumplimiento de sus normas.

Es común, en la actualidad, que los Códigos contengan principios de Política Hídrica en el sentido de pautas generales de actuación obligatorias para el Estado y los usuarios en beneficio del mejor régimen de uso del agua (tema sobre el que volveremos). Los aspectos inherentes a la seguridad jurídica que deben tener los administrados sobre sus derechos, para que exista justicia, lo abordaremos al tratar la conveniencia o no, que dentro del mismo Código, se consagren las normas de estructura y funcionamiento de la autoridad administrativa y Jurisdiccional que debe velar por la aplicación del Código.

## **2. Estructuras y realidades condicionantes**

La legislación y la administración de las aguas tienen una nota singular: están estrechamente vinculadas en su contenido y en su estructura a la realidad geográfica, hidrográfica y ambiental del ecosistema donde se aplicarán sus disposiciones. Cuando en los Estados Unidos se aprobó la Reclamation Act en 1902, Roosevelt afirmó que en un país húmedo no puede aplicarse una legislación semejante a la de una región seca. Mucho antes, en 1864, Perkins Marsh en su obra *Man and Nature* sostuvo que existe un condicionante geográfico-ambiental, que determina los fines y el contenido de la legislación sobre los recursos naturales y el agua, y al mismo tiempo, la estructura y el modo de gestión de la administración respecto a ellos.

En nuestro país se puede corroborar lo expuesto analizando el contenido de los Códigos de Agua Provinciales dictados en los últimos 40 años (Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Salta, Río Negro, entre otros.).

Se ha discutido entre los especialistas si un Código de Aguas debe contener como complemento necesario de sus disposiciones, las normas de organización y funcionamiento de la autoridad administrativa encargada de su aplicación.

El Código de Aguas de Salta (1946), obra del destacado jurista salteño Dr. Juan Carlos Cornejo Linares y del Ing. Juan W. Dates, incluyó como Título IX, la creación de la Administración General de Aguas de Salta (AGAS). Este órgano tenía a su cargo todo lo relativo al uso y administración de las aguas públicas, acueductos, servicio público de suministro de energía, exceptuándose las cuestiones de competencia de la justicia ordinaria.

Apuntamos que la referencia al Código de Salta de 1946 la hacemos como homenaje a sus autores y su obra. Es el primer Código “moderno” de argentina, y un verdadero modelo en la técnica legislativa seguida, son sus notas y fuentes, que constituyen un modelo digno de imitación.

Otro sector de la Doctrina (Cano, López, Marienhoff, entre otros), en una postura distinta, sostuvieron siempre que las disposiciones relativas a la autoridad de aplicación de la ley debían consagrarse en otro cuerpo legal. Fundaban su opinión en el hecho que la ley sustantiva de aguas (el Código), debía ser estable en el tiempo, tener permanencia. En cambio, la existencia de la autoridad administrativa, sujeta siempre a cambios y reorganizaciones, cuando no a reestructuraciones, debía figurar en otro cuerpo legal para facilitar tales modificaciones en su estructura y funcionamiento sin alterar las normas sustantivas del Código de Aguas.

Este fue el criterio seguido en el Proyecto de Código de Bolivia, de Nicaragua, y en el de Colombia. Los avatares políticos y la historia de esos países parecen darles la razón. Como todo el ciclo hidrológico esta alterado por la acción antrópicas del hombre, que ha generado en última instancia el cambio climático, que incide en todos los recursos ambientales, y esencialmente, en la biodiversidad, resulta necesario que en el proceso de codificación la materia a tratar se fije con claridad. También deben ser claros los fines que se buscan con la codificación y ser realistas, advirtiendo las limitaciones *latu sensu* que se tienen para alcanzarlos.

Me refiero al entorno socio cultural e histórico, a la educación de la gente, a los recursos presupuestarios que se tienen, a la calidad de los recursos humanos, a la economía informal y al sistema *extra legem* consuetudinario vigente en el lugar. Este escenario, que es multidisciplinar e interdisciplinar, debe meritarse integralmente, es la realidad pura donde el eventual Código regirá.

Lo que debe resolver la Política Hídrica es si el Código será de agua o será de ciertos usos del agua en particular. Me refiero a la unicidad global de la técnica a

utilizar. Tanto el moderno Derecho de Agua, como los Códigos de Agua de los últimos 40 años en todo el mundo, aconsejan legislar sobre todas las clases de aguas y sobre todos los usos. Ello viene impuesto por la unidad del ciclo hidrológico, por la interdependencia que vincula a todos los recursos ambientales y por la función del agua en la biodiversidad y en los ecosistemas como elemento causal de la interdependencia.

Por estas razones la técnica legislativa debe incorporar metodológicamente en su tarea codificadora a las llamadas “Instituciones ambientales”; que son técnicas, métodos, y procedimientos que permiten conocer, estudiar, registrar y regular eficazmente a los recursos ambientales. Todas cumplen un rol esencial.

Ellas son: la Evaluación, el Registro de aguas, de usos, de concesiones y permisos, de sus titulares; el Catastro, el Régimen de prioridades, la Reserva y la Veda, la Declaración de agotamiento de la fuente; la Evaluación de Impacto y la Evaluación de Vulnerabilidad; el régimen de Limitaciones al Dominio, la Zonificación, las medidas de Fomento y Disuasión; el Amparo Ambiental; y las acciones de Daño temido y Molestias intolerables (Arts. 2499 y 2618 CC). No es esta la ocasión, pero el análisis de cada una de ellas en su contenido, función y efectos justificaría plenamente un Curso.

La aplicación de todas ellas debe ser adecuada, es decir, circunscribir la materia e instituciones aplicables; que las normas guarden coherencia entre sí con subordinación al orden jurídico (art. 31 CN); que posean carácter operativo para evitar reglamentaciones “aclaratorias” que tergiversen o modifiquen el contenido, finalidad o alcance de la norma. Es aconsejable que los Códigos posean notas aclaratorias del mismo codificador y las fuentes doctrinarias y legales que han tenido en cuenta. Es un método complementario al lenguaje claro, conciso y unívoco que, en su momento, utilizaron Andrés Bello y Dalmacio Vélez Sarsfield, ausente en la legislación que aprueban nuestros legisladores hoy en día.

Lo que estamos refiriendo trae a colación los conceptos elaborados por Hans Kelsen, aun plenos de actualidad: la vigencia, la eficacia y la eficiencia de la ley. La vigencia está atada a la publicidad y al conocimiento del orden jurídico que ella representa. La eficacia apunta al grado de cumplimiento de la norma que sustenta el orden social. La eficiencia es la capacidad que posee la norma para la solución de los problemas y conflictos que intenta resolver. Un buen Código debe plasmar esta triada virtuosa.

### **3. La codificación y sus conflictos**

La directriz central de una codificación surge de la Política Hídrica que, en un Estado Federal, debe establecer cada provincia en virtud del dominio que ejerce sobre sus recursos naturales (Art 124 CN). Sin embargo, existen facultades exclusivas del Gobierno Nacional en materia de aguas que las provincias deben respetar (Arts.75 y 116 y cc).

En este aspecto –lo hemos sostenido reiteradamente–, la Nación ha invadido ilegalmente jurisdicción provincial, por aplicación del discutido sistema sancionado en el artículo 41 de la Constitución Nacional sobre presupuestos mínimos ambientales, que hemos interpretado siempre como una cláusula complementaria de las atribuciones provinciales.

Ex profeso, evitamos referirnos a las situaciones expansivas de la competencia nacional que son irritas al Federalismo: Poderes implícitos, la cláusula del comercio, la del progreso, los decretos de necesidad y urgencia, la noción misma de emergencia que habilita la modificación del presupuesto, la legislación sobre energía, sobre petróleo y otras situaciones aberrantes violatorias de nuestro sistema constitucional.

Creemos que las provincias deben ceñirse en sus Códigos de Aguas a su Política Hídrica local, que debe ser reflejo de su realidad geográfica, cultural, humana y ambiental, respetando el marco jurídico constitucional nacional. Lo expuesto supone respetar la Constitución Nacional en las facultades propias y exclusivas, la legislación sustantiva nacional (Arts. 2340, 2350, 2637 y cc CC), y el régimen de limitaciones al dominio que consagra el Código Civil, aplicado al ámbito administrativo provincial en función del artículo. 2611 del Código Civil.

En este campo no puede haber conflicto. La legislación provincial aplicable “se integra” y se complementa con la del Código Civil (restricciones, servidumbre, línea de ribera, etc.), con la legislación provincial en materia de ocupación temporánea y expropiación.

Queremos reiterar que en todo el mundo los problemas vinculados al agua son locales e inmersos en la realidad ambiental por la función del agua en los sistemas ambientales. En el tema sub examen la regla de oro es que no hay regla de oro (Cano 1970). Cada país, región o provincia, tiene una realidad propia e intrasferible respecto a sus recursos hídricos. Por tanto no se deben “importar” modelos de codificación, ni soluciones a problemas que son extraños al lugar. Las experiencias de otras partes del mundo pueden ayudar a visualizar problemas y las soluciones locales posibles, pero nunca serán la panacea superlativa.

La codificación de los recursos hídricos y la legislación complementaria sobre gestión administrativa para su aplicación son esencialmente multidisciplinarios e interdisciplinarios. Son temas científicos, racionales, que exigen una metodología crítica propia, ajustada a las circunstancias de tiempo y lugar.

Hoy, el problema del agua es el de su escasez y el de su contaminación (cantidad y calidad), y paralelamente, los efectos del cambio climático que hacen coexistir sequías, inundaciones, contaminación, epidemias y pandemias (catástrofes y desastres naturales o antrópicos).

Consecuencia de ello es que la técnica legislativa debe ser flexible, capaz de absorber las diferentes situaciones y escenarios que se presenten. En estas circunstancias juega un rol esencial la gestión y su estructura funcional.

En el Instituto del Agua y el Ambiente de la Universidad de Mendoza hemos comenzado a estudiar una especialidad nueva del Derecho de Aguas, el Derecho de la Sequía y su conexidad con otros problemas, tras cinco años de sequía no conocidos históricamente en la provincia. Por el contrario hoy aquí, por las inundaciones reiteradas que padecen, deberían reflexionar sobre el Derecho de las Catástrofes naturales y conexas.

Sin ninguna intención subalterna fuera de lugar, quiero reafirmar lo que dije antes: el carácter local de los problemas hídricos ambientales.

#### **4. Codificación y gestión. La búsqueda de soluciones a problemas concretos**

La crisis del agua exige actuar sin demoras en la solución de problemas acuciantes y para prevenir los futuros. Esto exige precisar conceptualmente el campo de actuación de un Código y el de la gestión complementaria.

El Código es la formulación normativa de la Política Hídrica, el modo de plasmar en la realidad los fines de ella, que de otro modo sería una pura fórmula teórica vacía de contenido.

Esa estructura de normas solo puede llevarse a la práctica a través de la gestión. La gestión, así entendida, es el obrar, la acción concreta aquí y ahora de la estructura burocrática que llamamos comúnmente el Estado, la Administración, en pro de la preservación y uso del agua. La gestión es la que hace realidad los fines, nos muestra el éxito, el fracaso o las falencias de la Política Hídrica. El Código dice, la gestión hace.

La gestión, su estructura, su organización funcional, su mayor o menor dependencia en los vericuetos de la burocracia, es el nudo gordiano de la administración del agua.

Debe estudiarse concienzudamente si será centralizada o descentralizada, si tendrá autarquía funcional y presupuestaria o no, si participarán o no los usuarios en el gobierno y administración del agua y en qué niveles, si abarcará todos los usos del agua o algunos, etc.

Como en todo el mundo –y nosotros no somos la excepción–, los problemas del agua son de gestión (no de falta de legislación), se debe prestar atención especial a este ámbito de la acción estatal. En muchos casos hemos visto que es la inadecuación de la ley a la realidad socio cultural del territorio y al sistema institucional, lo que ha hecho fracasar la gestión. También el caso inverso, excelentes leyes fracasan por una gestión plagada de ineficiencias y falencias.

Debemos tener en cuenta que generalmente la gestión es la que sufre los embates de la política, de la partidocracia, de las rencillas de los agentes insertos en la burocracia, etc. Pero estos son temas para otro encuentro que estaría lleno de sorpresas.

## **5. Los efectos dañosos de las aguas**

Un Código debe considerar los efectos dañosos de las aguas o que se causen a ellas, sea por la acción antrópica del hombre, sea por causas naturales. Tales daños deben prevenirse, morigerarse o suprimirse.

La defensa contra los efectos dañosos de las aguas o que puedan causarse a ellas, abarca un amplio campo de actuación pública y privada. Una enumeración de sus causas será suficiente para comprender la gravedad del tema:

Existe contaminación del agua cuando contiene sustancias nocivas para el ambiente, la salud o impide el uso que se le dé, afectando cauces, álveos, olor, sabor o temperatura. Puede ser natural o antrópica, y afectar cualquier etapa del ciclo hidrológico, incluye obviamente a las aguas subterráneas. La lucha contra la contaminación es compleja y se da en diversos campos y etapas. Exige prevención, fijación de estándares, límites a la descarga de efluentes y su tratamiento y penalidades. Comprende, a su vez, la consideración de los costos de tratamiento, el análisis de las externalidades y la aplicación del principio contaminador pagador. Naturalmente que supone un adecuado ejercicio del poder de policía y la aplicación de un severo régimen de sanciones.

La erosión de márgenes e inundaciones también pueden acontecer por causas naturales o antrópicas (uso agrícola del agua). Aquí las obras de defensa necesarias para evitarlas o morigerar sus efectos podrán ser hechas por el régimen de fomento o a cargo de los beneficiarios, resolviendo intrincados problemas económicos (costo de las obras, bienes protegidos, capacidad contributiva de la población, beneficios directos e indirectos), sobretodo en salvaguarda de las personas y bienes de la población.

Este tema guarda estrecha relación con el de la protección de cuencas hídricas, la aplicación de zonificación, de reservas y de vedas de uso que la autoridad deberá evaluar, junto con la plantación de bosques protectores. Los estudios de vulnerabilidad son imprescindibles porque serán la guía para acción pública y privada en defensa del ambiente.

La desecación de pantanos, las obras de desagüe y de avenamiento, son un capítulo importante para evitar los daños por salinización o revenimiento de suelos, o su recuperación.

En esta materia será esencial un Plan de Obras que podrá ser o no de fomento, según la magnitud de los intereses en juego y la capacidad contributiva de la población, con o sin la participación de consorcios de usuarios. La legislación extranjera prevé, en estos casos, que cuando las obras sean de magnitud importante el Estado se hará cargo de los costos y los terrenos pasaran a propiedad estatal.

## **6. El caso del código de aguas constitucional de Mendoza y la jurisdicción sobre aguas vigente en la provincia**

La Provincia de Mendoza tiene una extensa historia en el manejo del agua, que se remonta a los tiempos en que era el confín del Imperio Incaico. Los indios Huarpes, ya en ese entonces, usaban el agua para el regadío de sus incipientes cultivos agrícolas de subsistencia. La red huarpe de canales y acequias, en opinión de algunos especialistas, recién se moderniza técnicamente hacia comienzos del siglo pasado.

En el año 1884 se sanciona la Ley de Aguas, aun vigente, fuertemente influida por la Ley de Aguas española de 1874. Pero su autor, el Dr. Manuel Bermejo, hizo una obra notable para la época adaptando sus normas e instituciones a la realidad local y a los antecedentes históricos.

La Ley no es un Código. Legisla sobre las aguas públicas, su uso mediante concesión o permiso, establece un orden de prioridades de uso desactualizado, regla las restricciones y servidumbres vinculadas al uso del agua, la participación de los usuarios y las facultades de las autoridades. Establece que las cuestiones atinentes al dominio sobre las aguas son de competencia de la justicia local.

El gran cambio en el Gobierno y la Administración del agua, se produce con la sanción de la Constitución de 1916 y por obra del eminente jurista Honorio Barraquero que actuó como constituyente.

La Constitución dedica la Sección Sexta a la irrigación cuyo contenido en necesario precisar. Establece el principio de inherencia de la concesión de agua en favor del predio o industria al que se otorgó; los regantes de hijuelas, canales y desagües tienen el derecho de elegir sus autoridades y administrar sus rentas, sin perjuicio del control de la autoridad. Prevé la administración autónoma por cuenca en sus ríos.

Crea un ente autárquico, el Departamento General de Irrigación, que no es una autoridad de aguas, sino de riego, que tiene a su cargo todos los asuntos vinculados a la irrigación; le otorga la facultad de sancionar anualmente su propio presupuesto y percibir las tasas y reembolsos por las obras vinculadas al uso del agua; las concesiones para el uso del agua deben otorgarse por ley de la Legislatura. Los permisos los otorga el Superintendente.

Lo que debe resaltarse es que esta autoridad es la única en el mundo, de creación constitucional, investida de una autarquía funcional, territorial y financiera amplia, con autonomía técnica.

El Departamento tiene tres órganos: el Superintendente, el Consejo y el Tribunal Administrativo. Todos son elegidos a propuesta del Gobernador con acuerdo del Senado, duran cinco años en sus funciones y son removibles por el Jury de enjuiciamiento como los jueces.



El Superintendente es la máxima autoridad técnica y administrativa. El Consejo, integrado por cinco consejeros, es un Tribunal Administrativo de última instancia que actúa en caso de apelación contra las resoluciones dictadas por el Superintendente.

Los fallos del Consejo, como las resoluciones del Superintendente, en última instancia son recurribles ante la Corte de Justicia Provincial que concluye el reclamo. Cuando se trate de discutir el monto indemnizatorio en la imposición de las servidumbres vinculadas al uso del agua, actúa como Tribunal de alzada judicial, el Juez en lo Civil de Primera Instancia del lugar donde ubique el predio sirviente.

Por último, queda referirnos al Honorable Tribunal Administrativo que se integra cuando se reúnen y sesionan juntos el Superintendente y el Consejo. Tiene pocas pero importantes funciones: aprueba anualmente el presupuesto y cálculo de recursos; nombra y remueve a los empleados; aprueba o rechaza las elecciones de las autoridades de cauce y tiene una suerte de *ius edicendi*, pues dicta Reglamentos sobre cuestiones atinentes a su competencia que son obligatorios para los usuarios del agua. De hecho, se admite que la potestad reglamentaria de la Ley de Aguas compete al Tribunal y no al Gobierno Provincial.

Hemos referido que los usuarios participan en el Gobierno y Administración del agua. Eligen a sus autoridades. El Inspector de cauce es la máxima autoridad, acompañado en sus funciones por una Junta de Regantes y otra Revisora de Cuentas. Él es la primera instancia administrativa frente a reclamos o controversias entre usuarios. La segunda instancia es el Superintendente, y la última o tercera es el Consejo.

El sistema legal descripto se integra con la Ley 322, reglamentaria de la Constitución, que fija las competencias, deberes y atribuciones de los órganos del Departamento General de Irrigación; con la Ley 4035 de Aguas Subterráneas y con dos Resoluciones importantes: la Resolución 778/96 que es el estatuto sobre preservación de la calidad hídrica, y la 109/01 sobre evaluación de impacto ambiental hídrico. Completa este panorama la Ley Provincial del Ambiente 5961, de excelente contenido y técnica legal.

El abastecimiento urbano lo prestan una sociedad estatal Agua y Saneamiento, y múltiples cooperativas de servicios que funcionan bien. Las aguas residuales urbanas son depuradas en plantas de tratamiento y luego destinadas al reuso agrícola en áreas zonificadas de cultivos restringidos (bosques, pasturas, vides, frutales, ciertas hortalizas), bajo un estricto control del Departamento General de Irrigación, en resguardo de la salud pública.

Resulta entonces, aunque paradójal, que el Código de Aguas de Mendoza surge de la Constitución Provincial y de otras leyes complementarias que, en definitiva, han establecido los principios rectores de Política Hídrica, instrumentados en leyes y reglamentos conexos, que en su conjunto permiten el Gobierno y

la Administración del agua con la participación de los usuarios, abarcando todos los usos.

Mendoza hoy carece de un Código de Aguas, se maneja con una Ley de 1884 y con disposiciones constitucionales de 1916. Los mendocinos no estamos quejosos de la vejez de la ley, sino de la ineficiencia de la gestión de los hombres.

La Universidad de Mendoza ha dispuesto elaborar un Anteproyecto de Código a través del Instituto de Agua y Ambiente, que lo ha ofrecido en donación gratuita al Gobierno Provincial y en el cual trabajamos en la actualidad.

Una visión del conjunto normativo vigente en Mendoza me sugiere decir que no hay reglas de oro; que las normas vigentes, hoy centenarias, se adaptan a la idiosincrasia y a la realidad geográfica, climática y socio económica de la Provincia; que tenemos graves problemas de gestión originados en una estructura burocrática ineficiente, importantes deficiencias en el uso del agua por falta de inversiones en obras y a nivel de predio. La crisis de la economía regional nos ha golpeado muy fuerte. Nuestra agricultura regadía está fundida. No podemos hacer obras, ni menos instalar sistemas presurizados de riego.

No obstante, el agua sigue corriendo por los ríos y los canales en el sentido de la pendiente, nuestros agricultores, las industrias y la población siguen abasteciéndose de agua. Y como decía Toynbee en su Estudio de la Historia, sentimos que Mendoza ha respondido a lo largo de su historia al reto de su agreste geografía.